

El fugitivo feliz

Escondido en México o en Alemania, de donde es originaria su esposa y donde las autoridades presumen que tiene negocios, Emilio Lozoya Austin, el fugitivo exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y cohecho, ha sido protegido por la justicia federal, tal como lo preveía el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Yo puedo, en mi calidad de fiscal, iniciar un procedimiento, llevarlo ante un juez y litigarlo. Lo que no puedo garantizar son las conductas de los jueces. ¡Ahí vámonos entendiendo!”, advertía Gertz al reportero, el 30 de mayo, después de que la juez Luz María Ortega Tlapa concedió a Lozoya la suspensión provisional de la orden de aprehensión, que hizo definitiva una semana después.

“Es decir –añadió Gertz sobre los jueces--, yo gano un asunto en razón de que hice todo lo que está en mis manos, lo digo como abogado litigante, (pero) yo he sufrido lo que es este sistema perverso, en el que uno demuestra todo, lleva las pruebas de todo y se la voltean a uno en un acto de vileza verdaderamente espantosa”.

Y es que la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal alegó que se trata de delitos no graves que no exigen prisión preventiva, por lo que suspendió la orden de aprehensión que libró José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.

Aunque Lozoya Austin no puede ser detenido por estos delitos y debe presentarse ante el juez Zúñiga Mendoza, a más tardar el lunes 10 –y su hermana Gilda el miércoles 12--, se da como un hecho que no lo hará hasta que el juez resuelva el amparo que solicitó, siempre y cuando sea a su favor.

La razón es que, además de la compra a sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados, tiene otros casos de corrupción pendientes, como el relacionado a los 16 millones de dólares que recibió en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En este caso, que la Fiscalía General de la República también llevará ante un juez, las transferencias del dinero y los testimonios de los directivos de Odebrecht hunden a Lozoya Austin, hijo del mejor amigo de Carlos Salinas, Emilio Lozoya Thalmann.

Fue precisamente Salinas quien privatizó, en 1992, millones de dólares y en calidad de chatarra en la que invirtió otros 760 mil dólares sin lograr producir fertilizantes, a favor del empresario Alonso Ancira, Altos Hornos de México (AHMSA), del que formaba parte Agronitrogenados, y él vendió a Pemex cuando Lozoya Austin lo

dirigía, en 2013, a un sobrepeso de 475 millones de dólares, y en calidad de chatarra en la que invirtió otros 760 mil dólares sin lograr producir fertilizantes.

Los otros presuntos implicados: A diferencia de Lozoya, uno de los mejores amigos de Enrique Peña Nieto, Ancira sí fue capturado tras un periplo en su avión particular que lo llevó de México a Nueva York y de ahí a España, donde fue detenido, el 28 de mayo, cuando se disponía a regresar a Nueva York. Ancira viajó el fin de semana en su avión sin que pudiera ser detenido fuera de México por la falta de la “ficha roja” de la Interpol, y sólo hasta que la FGR la obtuvo, explicó Gertz, fue detenido en la isla de Mallorca, España.

“Estuvimos esperando que saliera la ficha, que esto fue entre domingo (26) y lunes (27 de mayo), y en el momento que salió, él ya había abandonado el aeropuerto y ya estaba tierra adentro en la isla. No sabíamos si había salido en barco, no sabíamos nada. En ese momento cambiaron otras vez los planes de vuelo del avión y cuando dijeron que iban a salir un día, dijeron que no, que salían en dos horas, para que no diera tiempo de nada.

“Y en ese momento ellos nos avisaron que ya tenían la ficha roja y ese cambio ya no lo pudieron ejercitar: iban a entrar de nuevo a Estados Unidos, según decían en el plan de vuelo. Y ahí fue donde lo aprehendieron. Lo llevan a una cárcel en Mallorca”.

Mientras se desahoga el proceso de extradición de Ancira, en un plazo de 45 días la FGR prevé presentar más elementos contra funcionarios que intervinieron en la compra-venta de Agronitrogenados, como los miembros del Consejo de Administración de Pemex, particularmente los que participaron en la sesión extraordinaria 865, del 17 de diciembre de 2013, cuando se tomó el “Acuerdo-134/2013”.

De hecho, de manera insólita, algunos de esos integrantes ya pidieron, públicamente, ser llamados a declarar: Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo –quienes fueron titulares de Energía y Economía, respectivamente durante la administración de Enrique Peña Nieto--, así como Enrique Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad en la administración pasada.

“Formé parte del consejo de administración (de Pemex) de diciembre de 2012 a enero de 2014. No fue en el consejo donde se tomó esa decisión”, aseguró Ochoa, expresidente del PRI.

Luis Videgaray, quien estaba al frente de Hacienda cuando se efectuó la operación, ha guardado silencio al respecto, sabida su rivalidad con Lozoya, pese a que fueron coordinador y coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Otros dos personajes presuntamente relacionados en la venta de Agronitrogenados son Xavier Autrey Maza, vicepresidente de AHMSA, y su sobrino Arturo Henriquez

Autrey, director corporativo de Abastecimiento de Pemex, amigo de Lozoya y despedido en 2015, cuando Reforma publicó una fotografía en que se ve de vacaciones junto al fundador de Oceanografía, Amado Yáñez.

El caso de Agronitrogenados que persigue la FGR, que representa la primera denuncia presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de Pemex, es pieza clave que conecta con otro caso de corrupción que es Odebrecht.

En efecto, según investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto Castillo, un mes después de que vendió a Pemex Agronitrogenados, AHMSA hizo una transferencia de casi 4 millones de dólares a Granemouth Trading Company, una sociedad offshore con sede en Edimburgo identificada como el instrumento que utilizaba Odebrecht para el pago de sobornos a políticos y funcionarios de alto nivel de gobiernos latinoamericanos donde conseguía contratos de obra pública.

Parte de este soborno fue luego transferido a una segunda empresa pantalla y, después, a las cuentas de Emilio Lozoya Austin, según las confesiones de directivos de Odebrecht que reveló la organización Quinto Elemento Lab en abril de 2018.

En sus declaraciones juramentadas, Luis Alberto de Meneses Weyll, Luiz Mameri y Hilberto da Silva, directivos de Odebrecht, confesaron que entregaron 10.5 millones de dólares de sobornos a Lozoya, y que le depositaron 4 millones 130 mil dólares durante la campaña presidencial de Peña Nieto, en la que Lozoya era coordinador de Vinculación Internacional.<>